Participar e influir en una sociedad digital: ¿tenemos realmente capacidad para decidir?

BizkaiaGara y Europe Direct Bizkaia reúnen a Igor Calzada y Ainhoa Lasa en una jornada de reflexión sobre democracia, inteligencia artificial y participación ciudadana. El encuentro invita a repensar el papel de la sociedad civil ante el creciente poder de las plataformas digitales y a preguntarse cómo transformar la participación en una capacidad real de incidencia.

Bilbao, 17 de noviembre de 2026.

¿Tenemos hoy más oportunidades para participar en las decisiones que nos afectan o simplemente disponemos de más canales para expresar nuestras opiniones? ¿Quién determina qué información recibimos, qué asuntos ocupan el debate público y qué posibilidades tenemos de influir en las políticas públicas?

Estas fueron algunas de las cuestiones que centraron la jornada **«Participar e influir en una sociedad digital»**, organizada por BizkaiaGara y Europe Direct Bizkaia en Bilbao, con la participación de Igor Calzada, investigador Ikerbasque y profesor de la Universidad del País Vasco (EHU), y Ainhoa Lasa López, profesora titular de Derecho Constitucional de la misma universidad.

El encuentro reunió a representantes de organizaciones sociales y ciudadanía en un espacio de reflexión que combinó dos perspectivas diferentes y complementarias: la transformación de la democracia a través de la tecnología y la necesidad de revisar las condiciones políticas, económicas y sociales que hacen posible una participación verdaderamente democrática.

De tener voz a tener influencia: el reto de la sociedad civil

En la apertura, Johana Etxezarraga, coordinadora de BizkaiaGara, situó el debate en los desafíos que afrontan las organizaciones sociales y la ciudadanía en un contexto en el que buena parte de la conversación pública, la movilización y la capacidad de incidencia se desarrolla también en los entornos digitales.

La cuestión de fondo, señaló, no es únicamente cómo utilizar las nuevas herramientas, sino cómo conseguir que la sociedad civil organizada y no organizada pueda ocupar estos espacios y participar de manera significativa en las decisiones que afectan a la vida colectiva.

En este escenario, las entidades sociales afrontan nuevos retos. A sus funciones tradicionales de acompañamiento, sensibilización, voluntariado y construcción comunitaria se suman otras capacidades cada vez más necesarias: generar conocimiento, interpretar las políticas públicas, construir alianzas, promover liderazgos cívicos y formular propuestas colectivas capaces de influir en las instituciones.

También planteó una tensión fundamental: **la incidencia requiere conocimiento, estrategias y recursos, pero ¿cómo evitar que esa profesionalización deje fuera a las personas y colectivos que encuentran mayores dificultades para participar?**

La dimensión europea estuvo igualmente presente desde el inicio. Las causas sociales trascienden las fronteras y las iniciativas locales pueden conectar con movimientos y debates europeos. Sin embargo, esa oportunidad convive con la preocupación por el lugar que ocupa la sociedad civil en las prioridades políticas y económicas actuales.

Igor Calzada: la calle y la pantalla ya no son dos mundos separados

La primera intervención, a cargo de Igor Calzada, abordó cómo los algoritmos, las grandes plataformas tecnológicas y la inteligencia artificial están transformando la participación y la toma de decisiones.

Su punto de partida fue claro: **no podemos seguir separando lo que sucede en internet de lo que ocurre en nuestras calles**. Las experiencias digitales y presenciales se influyen mutuamente, condicionando nuestras relaciones, nuestras opiniones y nuestra forma de comprender la realidad.

Calzada recurrió al concepto de *caja negra* para explicar la falta de transparencia de muchos sistemas digitales. Utilizamos plataformas que seleccionan información, orientan nuestra atención e incluso pueden influir en nuestras decisiones sin conocer suficientemente los criterios que determinan su funcionamiento.

La expansión de la inteligencia artificial introduce nuevos interrogantes. Ya no se trata únicamente de qué contenidos vemos, sino de qué decisiones podemos llegar a delegar en sistemas automatizados, quién establece sus límites y quién asume la responsabilidad cuando se equivocan.

El investigador también advirtió de la dependencia tecnológica de las administraciones y de la concentración del poder en grandes empresas que controlan datos e infraestructuras digitales. Frente a ello, defendió una **gobernanza anticipatoria de la inteligencia artificial**, capaz de evaluar sus

riesgos antes de implantarla, fortalecer las capacidades públicas y garantizar mecanismos de transparencia, explicación y reclamación.

Desde su experiencia investigadora con instituciones y municipios de Gipuzkoa, insistió en que la transformación digital no puede quedar exclusivamente en manos de especialistas tecnológicos. Debe incorporar a las administraciones, las empresas, las organizaciones sociales y la ciudadanía.

Su intervención dejó una reflexión especialmente relevante: estar conectados no garantiza participar y participar tampoco significa necesariamente poder decidir. La verdadera cuestión es qué capacidad conservamos para orientar colectivamente el desarrollo tecnológico hacia el interés público.

Ainhoa Lasa: sin igualdad social no hay participación democrática real

La profesora Ainhoa Lasa aportó una mirada crítica desde el derecho constitucional y la justicia social. Su intervención cuestionó la idea de que la digitalización represente, por sí misma, un avance democrático.

Para Lasa, hablar de participación exige preguntarse primero por las condiciones materiales que permiten ejercerla. Las desigualdades económicas, la pobreza y las relaciones de poder limitan profundamente la capacidad de muchas personas para intervenir en las decisiones colectivas, independientemente de que existan nuevos canales tecnológicos.

La democracia no puede reducirse a procedimientos formales de consulta si una parte de la población carece de las condiciones necesarias para ejercer plenamente sus derechos.

Desde esta perspectiva, advirtió de que las tecnologías pueden reproducir e incluso amplificar discriminaciones preexistentes. Los datos utilizados por los algoritmos no son neutrales y pueden trasladar a las decisiones automatizadas los prejuicios y desigualdades presentes en nuestras sociedades.

Lasa también invitó a mirar más allá de las pantallas y a reconocer los costes humanos y ambientales de la digitalización: la extracción de minerales, el consumo de energía y agua, las condiciones laborales y las consecuencias que determinadas infraestructuras tecnológicas tienen sobre los territorios y las comunidades, especialmente en el sur global.

En relación con la Unión Europea, analizó críticamente sus políticas de regulación digital y participación de la sociedad civil. Cuestionó que el enfoque de la competitividad y del mercado ocupe un lugar predominante frente a los derechos sociales y colectivos, y defendió la necesidad de recuperar el papel político de la

ciudadanía, más allá de su consideración como usuaria o consumidora de servicios digitales.

Su planteamiento situó la justicia social en el centro del debate: **no basta con democratizar el acceso a la tecnología; es necesario democratizar las relaciones de poder y las decisiones sobre el modelo de sociedad que queremos construir.**

Un diálogo sobre tecnología, territorio y acción colectiva

Tras las ponencias, el conversatorio entre ambas personas expertas y el público permitió profundizar en algunas de las cuestiones planteadas y trasladarlas a preocupaciones concretas.

Uno de los asuntos que despertó especial interés fue el impacto material de la digitalización. El consumo energético de los centros de datos, la utilización de recursos naturales y sus consecuencias para las comunidades pusieron sobre la mesa la necesidad de que las decisiones tecnológicas sean también decisiones públicas y democráticas.

El diálogo permitió identificar coincidencias entre ambas perspectivas, especialmente en la importancia de recuperar el control colectivo sobre las transformaciones digitales, aunque con diferentes enfoques sobre cómo hacerlo.

Calzada defendió la construcción de espacios de deliberación en los que participen instituciones, conocimiento científico, empresas y sociedad civil, especialmente desde el ámbito municipal y territorial. Lasa insistió en la necesidad de repolitizar estas decisiones y de que las organizaciones sociales intervengan incluso en la definición de los datos y criterios utilizados por los algoritmos.

Una de las aportaciones más sugerentes fue precisamente la idea de **«negociar el algoritmo»**: incorporar el conocimiento de las entidades que trabajan directamente con personas en situación de exclusión para evitar que los sistemas automatizados reproduzcan diagnósticos incompletos o decisiones discriminatorias.

Desde el público surgió también una pregunta muy vinculada al trabajo cotidiano de las organizaciones: ¿cómo construir nuevas narrativas, generar alternativas y movilizar a la ciudadanía cuando buena parte de la conversación pública transcurre en espacios digitales dominados por grandes plataformas?

La respuesta abrió una línea de reflexión compartida: recuperar el encuentro, el diálogo y la acción colectiva sin renunciar a intervenir en los espacios digitales donde también se construye hoy la opinión pública.

¿Qué democracia queremos construir?

La jornada no pretendía ofrecer respuestas definitivas, sino abrir preguntas que resultan fundamentales para el futuro de la participación ciudadana.

¿Quién decide qué merece nuestra atención? ¿Cómo podemos distinguir la información fiable de la manipulación? ¿Qué decisiones estamos dispuestos a delegar en la inteligencia artificial? ¿Quién participa en el diseño de las tecnologías y quién queda fuera? ¿Cómo garantizamos que las innovaciones respondan a las necesidades sociales y no únicamente a intereses económicos?

De las intervenciones y del diálogo surgió una conclusión transversal: **la calidad de una democracia no se mide por el número de plataformas de participación disponibles, sino por la capacidad real de las personas para influir en las decisiones que afectan a sus vidas.**

Para las organizaciones sociales, esto implica un doble desafío. Por un lado, fortalecer sus competencias digitales, su conocimiento y su capacidad de incidencia. Por otro, preservar aquello que constituye su principal valor: la cercanía a las personas, el conocimiento de las realidades sociales, la construcción de vínculos y la capacidad de generar respuestas colectivas.

El encuentro recordó, además, que las transformaciones tecnológicas no son inevitables ni neutrales. Responden a decisiones humanas, políticas y económicas y, por tanto, pueden y deben ser objeto de deliberación democrática.

En un momento en el que parece que todo invita a conectarse, quizá una de las tareas más importantes sea preguntarnos **cómo queremos conectarnos, para qué queremos participar y qué necesitamos transformar para que nuestras voces tengan una influencia real**.

Con esta reflexión, BizkaiaGara y Europe Direct Bizkaia cerraron una jornada que reafirmó la importancia de generar espacios donde el conocimiento académico, la experiencia de las organizaciones y las preocupaciones ciudadanas puedan encontrarse para pensar colectivamente el futuro de nuestra democracia.